El Salvador

CIDAI
CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Proceso
informativo semanal

Año 27, Nº 1218
Noviembre 15, 2006
ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial 2
Otra oportunidad para el presidente Saca

Político 4
Daniel Ortega y sus desafíos

Económico 7
Crecimiento, desigualdad y pobreza en América Latina

Social 10
Inseguridad y violencia

Reporte IDHUCA 13
¿Periodismo en crisis?

Documento 15
Comunicado de la PDDH ante grave situación delincuencial

editorial

Otra oportunidad para el presidente Saca

Cuando Elías Antonio Saca fue investido como presidente de la República, el 1de junio de 2004, pese a las resistencias de los más críticos, no faltaron los optimistas, que esperaban del nuevo presidente algo distinto a lo tenido hasta entonces, en materia de conducción gubernamental. A decir verdad, había pocas razones para el optimismo: desde 1989, cuando ARENA asumió por primera vez la dirección del Ejecutivo, se repitió una y otra vez la historia del maridaje entre un sector empresarial privilegiado, el gobierno y el partido ARENA. El fraude más grande fue, sin duda alguna, la presidencia de Francisco Flores, marcada por la incompetencia, la corrupción y la renuncia a trabajar por el bienestar social mínimo. Con esta sombra sobre sus espaldas, le tocó el turno de gobernar a Saca, quien —en su discurso de toma de posesión— dio algunas señales importantes de que su ejercicio de gobierno sería distinto a lo tenido hasta entonces.

Durante su primer año de gobierno, Saca tuvo la oportunidad de demostrar que tenía el talante para no ser un simple presidente, sino un mandatario, es decir, un líder capaz de reorientar el rumbo del país. En ese primer año, Saca fue, cuando menos, tibio en las decisiones que le correspondía tomar. Su segundo año fue terrible. En el contexto de las elecciones para diputados y alcaldes de marzo de 2006, renunció a ser mandatario y, más aun, a ser presidente de la República, para actuar como presidente de su partido. Los costos que tuvo que pagar por ello fueron elevados.

Desde entonces, su imagen, su prestigio y su (relativo) liderazgo se vinieron abajo ante la opinión pública nacional e internacional. A la par de ello, los problemas en el país se agudizaron, especialmente la situación de violencia e inseguridad. Al renunciar a su responsabilidad como presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas, perdió la posibilidad de tener una visión de conjunto del país. La perspectiva fracasada de Flores en la lucha contra el crimen lo amarró irremediablemente; también lo amarraron los intereses de los empresarios corporativos, para los cuales lo único que cuenta es amasar fortunas al precio que sea.

En lo que va de su gestión, Saca no ha podido convertirse en el mandatario que la sociedad salvadoreña necesita. Su primer año de gobierno fue una gran oportunidad para hacerlo y la desaprovechó. ¿Tiene en estos momentos una nueva oportunidad de asumir el rol de mandatario? Todo parece indicar que sí. Las iniciativas que ha tomado en los últimos días en materia de seguridad –junto con giros importantes en su discurso acerca de la violencia— dan la pauta para pensar en la posibilidad de un cambio de marcha en su gestión.

No se trata de ser ingenuos al respecto –pues no hay que descartar que pueda tratarse de un juego de imágenes— ni de desestimar en sus recientes reacciones las presiones tanto de la empresa privada como de la embajada de EEUU. Sin embargo, aun con sobradas reservas, no hay por qué desechar la posibilidad de que Saca pueda convertirse, en lo que le queda de mandato, en el líder que el país necesita.

Se tiene que dejar bien claro que, hasta ahora, Saca ha estado lejos de ser un líder político para el conjunto de la sociedad salvadoreña. También se tiene que decir que sus iniciativas y discurso de los últimos días no lo convierten en el líder de los salvadoreños y salvadoreñas. En lo absoluto. Y es que para que Saca sea el líder que el país necesita en estos momentos debe hacer algo más que aceptar sus errores en el combate de la delincuencia. Debe, entre otras cosas, romper con el maridaje entre los empresarios, el gobierno y ARENA; independizar al gobierno del partido; sanear al aparato gubernamental de funcionarios corruptos, incompetentes y mal intencionados; y debe convertir en regla de oro de la gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Por el momento, no ha hecho nada de esto, así que considerarlo el líder al cual todos debemos seguir es un franco desatino. Cuando lo haga, en ese momento habrá que rendirle los mejores honores. Indudablemente, ninguna de estas tareas va a ser realizada sin tensiones y conflictos; pero es en la capacidad de encarar esas tensiones y conflictos donde se pondrá a prueba su liderazgo.

De momento, ha comenzado a dar unos primeros pasos en la dirección correcta. Pero estos primeros pasos pueden desviarse por un camino equivocado si Saca no presta atención al saneamiento de su gobierno. Y es para eso que sirve la rendición de cuentas. Porque el país se encuentra en una situación tan calamitosa en materia de seguridad pública porque hay quienes en su gobierno no han cumplido con sus obligaciones. "No se trata de quien es el responsable –opina Saca—, sino de qué vamos a hacer para resolver el problema". A eso hay que responderle que una cosa no excluye la otra: se trata de deducir responsabilidades y de hacer lo que sea necesario para resolver el problema. Y hacer lo que sea necesario para resolver el problema de la criminalidad en el país, exige evaluar el desempeño de los responsables de la seguridad pública, así como pedirles cuentas por su (pésimo) desempeño.

En fin, Antonio Saca tiene otra oportunidad para cumplir con su responsabilidad como presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Si la pierde, quizás no vuelva a tener otra. Seguirá los pasos de Flores, considerado por muchos como uno de los peores presidentes en la historia reciente de El Salvador. Cuesta creer que Saca quiera ser recordado a la par de Flores. Si sigue en la ruta insinuada en estos días, a nadie se le ocurrirá siquiera hacer una comparación entre ambos. De todos modos, más que ser comparado con Flores, lo que debería ser más importante para Saca es el convencimiento de que sí personas como él no hacen nada para resolver los problemas del país, este se precipitará en el abismo del caos generalizado, en el cual los únicos ganadores serán los que tienen desde ya sus millonarias cuentas bancarias en el extranjero.

Daniel Ortega y sus desafíos

Las consignas y colores partidistas en las calles y rincones de Nicaragua finalizaron su hegemonía, para dar paso a la competencia electoral por la presidencia y escaños legislativos, realizada el pasado 5 de noviembre. Como resultado de los comicios, Daniel Ortega, presidente durante buena parte de la llamada revolución Sandinista, y lider del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue elegido de nuevo, tras 16 años de derrotas, como el mandatario de ese país para los próximos cinco años.

Según algunos, este hecho representa un retroceso en el proceso democrático nicaragüense. No obstante, la democracia procedimental ha demostrado su eficacia una vez más al declarar ganador al candidato con mayor número de votos, tras un recuento considerado limpio y transparente. En ese sentido, ha sido el método democrático el mecanismo por medio del cual Ortega accede de nuevo al poder. Al cual llega, después de tres intentos fallidos.

El resultado electoral ha provocado diversas reacciones entre los sectores más conservadores de la sociedad nicaragüense. El gremio empresarial se ha mostrado temeroso y a la expectativa sobre el futuro del modelo económico instaurado desde 1990 por las sucesivas gestiones de los liberales. De igual modo, algunos medios de comunicación nicaragüenses han expresado sus reservas en cuanto a la victoria de Ortega, pues señalan que este no mantuvo una buena relación con la prensa durante la campaña electoral, lo cual los hace suponer que su actitud como gobernante será similar.

No obstante estas preocupaciones y señalamientos, Ortega ya salió al paso con respuestas hacia esas inquietudes. Así, ha declarado que durante su gestión respetará el modelo económico vigente en Nicaragua, lo cual incluye mantener el libre mercado, o sea no intervenir en el juego económico. Además, brindará garantías de inversión al sector empresarial y a los grupos financieros. Junto a estas declaraciones, Ortega ha implementado como estrategia el acercamiento a diversos sectores a fin de dialogar y presentar sus ideas de gobierno para el próximo período, lo cual también incluye entablar relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el resto de partidos políticos nicaragüenses. La Iglesia católica, acérrima crítica del FSLN, también ha sido un actor clave con el cual Ortega ha establecido acercamientos.

Para algunos sectores críticos, intelectuales, líderes de opinión y los simpatizantes de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, el planteamiento de Ortega expresa sólo una extensión más de los acuerdos o pactos firmados por este y el partido de Arnoldo Alemán, a fin de obtener beneficios mutuos. En sus palabras, Ortega ha planteado un modelo en apariencia inclinado hacia lo social, pero restringido, en definitiva, por las lógicas del mercado y las posturas de los sectores más poderosos. Dicho sea de paso, estas ideas contradicen en mucho el espíritu que sustentó la revolución Sandinista y dejan en entredicho el discurso ideológico actual abanderado por el reconocido lider.

Sobre la victoria de Ortega se han manejado algunas tesis. Para algunos, la división entre las propuestas de derecha, con Eduardo Montealegre como candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, y José Rizo, por parte del Partido Liberal Constitucionalista, fue un factor clave para entender la victoria del FSLN. Pese a estas diferencias entre la derecha, que podrían considerarse favorables al FSLN en algún sentido, también hubo obstáculos como la injerencia de EE.UU. y las estrategias de descrédito implementadas por la derecha, muy similares a las campañas lanzadas en El Salvador por ARENA y sus sectores afines. Sin embargo, los esfuerzos de estos sectores fueron incapaces de debilitar el desempeño del FSLN. En ese sentido, en buena parte, el discurso de Ortega en nombre de la reunificación nacional, junto a sus acercamientos, durante el periodo de campaña, podrían considerarse como los factores que contribuyeron a su ascenso al poder.

Desde una mirada desapasionada, no es desdeñable el hecho de que la izquierda llegue al poder presidencial en Centroamérica, sobre todo, a partir de las exitosas experiencias en los vecinos países del sur. En esa línea, la victoria del FSLN debe verse como una oportunidad histórica para la izquierda, la cual viene acompañada de los más diversos retos a cumplir por Ortega y compañía. Desafíos tanto en su interacción con el

resto de actores de la vida política nicaragüense, en su relación con Centroamérica, Venezuela y EEUU, así como en el logro de una atinada gestión del poder, en beneficio de las mayorías empobrecidas.

Nicaragua ahora

Cuando Ortega asuma la presidencia el próximo año, recibirá de manos de Enrique Bolaños una Nicaragua no muy distinta a aquella que vivió desde 1990 bajo las gestiones de los partidos liberales. Se encontrará con una sociedad dispersa, excluida en su mayoría de las oportunidades y sumida en precarias condiciones de vida, que convierten a Nicaragua en el segundo país latinoamericano más pobre después de Haití.

Por si fuera poco, tras los escándalos de corrupción, salidos a luz pública durante la gestión de Arnoldo Alemán, no es de extrañar que Nicaragua, a manera de confirmación, se posicione en el puesto 111 de países percibidos con mayores niveles de corrupción en el mundo, tal como lo determina el *Informe 2006* de la organización Transparencia Internacional. En ese sentido, este país enfrenta una situación política hundida en el menos favorable de los ambientes, pues la corrupción a todo nivel se ha convertido en un mal endémico de la clase política, señalamiento al cual no escapa el FSLN.

Sumado a este ambiente poco favorable —y poco atrayente para la inversión extranjera— también sobresale la crisis energética y, por extensión, económica que atraviesa Nicaragua. Como resultado de su alta dependencia del petróleo y las variaciones de precio de este en los mercados internacionales, el país cuenta con una economía débil e incapaz de generar mayor inversión social. Precisamente, en 2006 el país vivió una de sus más fuertes crisis, pues su capacidad de producción de energía eléctrica se vio afectada, tras el encarecimiento del crudo en los mercados internacionales. Entre otros problemas económicos, las exportaciones no representan mayor cambio o aumento desde hace más o menos una década y, al contrario, las importaciones registran un alza importante. Por otro lado, Nicaragua enfrenta una deuda externa grande y un endeudamiento interno cada vez más asfixiante, pues el gobierno aún financia los bonos emitidos en 2000, tras la crisis del sistema financiero. Por lo cual, la mayor parte de los ingresos estatales es usada para aminorar los montos de las deudas, tal como lo señala la revista *Envío*, publicada por la UCA de Nicaragua.

Así las cosas, el panorama económico de Nicaragua no es alentador, lo cual se refleja en las mayorías empobrecidas y en las pocas capacidades para grandes segmentos de población que ven reducidas sus aspiraciones.

Reacciones en El Salvador

La llegada del FSLN al gobierno nicaragüense plantea retos para los países de Centroamérica, pues un gobierno orientado hacia la izquierda en la región supone no sólo una oportunidad para entablar relaciones de cooperación, sino además abre posibilidades para que otros países lleguen a un cambio de ese tipo.

En ese sentido, El Salvador ha prestado atención a los resultados electorales y se han producido visiones encontradas. Por un lado, la derecha manifestó sus reservas al respecto, y ayudó a la derecha nicaragüense para desprestigiar al FSLN, con el fin de presentarlo como una opción poco viable para el futuro de Nicaragua. Incluso, empresas mediáticas como *El Diario de Hoy,* digno representante de la derecha más recalcitrante salvadoreña, ha señalado que a Nicaragua le espera lo peor con Ortega en el poder.

Saber entenderse y relacionarse con un gobierno de izquierda en la región, sin recurrir a la estigmatización y al rechazo frontal es una de las tareas que el gobierno de Antonio Saca deberá asumir. En esa línea, se requiere de una tolerancia política a fin de estrechar lazos entre los países y mejorar las relaciones de cooperación. También, Saca debe dejar a un lado su paranoia sobre la injerencia de Hugo Chávez, ahora que Ortega podría funcionar como su aliado en la región.

Por su lado, el FMLN se unió al regocijo del FSLN. En este caso, al partido salvadoreño también se le abren posibilidades. El gane de Ortega no sólo puede servir como impulso y esperanza para la izquierda local, sino como un referente cercano sobre el manejo de la cosa pública. Incluso, la postura y estrategia de Ortega podrían ser un ejemplo para el FMLN, en la medida en que fueron tácticas que le permitieron llegar al poder. Así, la búsqueda de diálogo, sin caer en

puro pragmatismo, debe ser una estrategia clave para lograr que la izquierda acceda a mayores espacios de poder en El Salvador, todo a través de su capacidad de gestión.

En ese sentido, si bien una lectura sobre el avance de la izquierda en América Latina y su despliegue hacia Centroamérica es aceptable. Este hecho también debe percibirse como una vía que le permita examinar sus posturas y estrategias a este instituto político, a fin de sumarse a la tendencia y concretar su deseo de gobernar el país para promover un cambio social.

Retos a vencer

A Daniel Ortega, buena parte de la sociedad nicaragüense le ha dado una nueva oportunidad para gobernar y demostrar su capacidad para instaurar cambios positivos en beneficio de las condiciones sociales y económicas del país. En ese sentido, enfrenta el gran reto de aprovechar a plenitud esta oportunidad para impulsar un proyecto político inclusivo y de gran alcance.

En declaraciones a *BBC mundo*, Ortega ha afirmado que como lider del FSLN, él responde a un proyecto, a una revolución y a un proceso. Por lo cual, su regreso a la presidencia es sólo una etapa más de la historia de Nicaragua. Entre sus promesas de campaña, Ortega propuso crear lazos de cooperación con Venezuela. Por ejemplo, ha planteado el fomento de un banco estatal que recibiría asesoría del gobierno de Hugo Chávez y funcionaría con capital producto de la venta de petróleo venezolano en Nicaragua. (*Envío* N° 294, septiembre de 2006).

Más allá de su optimismo exacerbado y su discurso grandilocuente, lo que Ortega debe hacer, una vez asuma la presidencia, es crear consensos mínimos entre la sociedad nicaragüense para generar un ambiente estable. Sólo así podrá gobernar durante su período, pese a no contar con mayoría en el parlamento y ser aún fuente de temor para algunos sectores.

Sólo bajo esa premisa, sus ideas de campaña —unificar a Nicaragua y buscar la paz— hacen sentido, pues uno de sus principales retos es demostrar su capacidad y eficacia en la administración del poder, lo cual debe traducirse, necesariamente, en políticas públicas enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas.

Quizás, el segundo gran desafío para Ortega y el FSLN sea demostrar que la izquierda puede gobernar con ética y transparencia. En definitiva, pues, que pueda desafiar a la corrupción, lo cual pasa por desarticular las redes entre los partidos políticos, y lograr que estos rindan cuentas sobre su desempeño, tarea que además debe asumir la sociedad civil.

Asimismo, debe mostrar la suficiente apertura para trabajar con los empresarios y aprovechar esa relación para el beneficio de los más necesitados; es decir, que el modelo económico logre dar frutos a las mayorías excluidas. Una de sus tareas debe ser construir una visión de país, tal como lo anunciaba en su campaña: lograr una Nicaragua en la que exista un consenso generalizado sobre el futuro y la construcción de oportunidades de desarrollo.

De cara a la región, un reto más es lograr un cambio en el proceso de integración centroamericana, lo cual si bien no será fácil, por diferencias de signo político con el resto de países, debe ser una meta del futuro gobernante. Si de integración se trata, también Nicaragua podría sumarse, como lo ha planteado ya Ortega, a la Alternativa Bolivariana para las Américas, como un espacio distinto desde el cual generar procesos de desarrollo de la región, que le permitan deslindarse del control estadounidense.

Esta victoria también supone retos al interior del FSLN. Por un lado, es necesario el surgimiento de nuevos liderazgos, es decir, ya Ortega se ha enquistado en el poder, lo cual no es saludable, ya que esto actúa en detrimento de la renovación partidista y, en alguna medida, de la identificación de sus partidarios o aquellos posibles apoyos. En el ámbito interno, pareciera ser que no se aplican mecanismos democráticos para la elección de candidatos y, por tanto, las decisiones obedecerían más a un esquema jerárquico con énfasis en los viejos líderes, más que en una visión amplia y abierta al diálogo.

En definitiva, para lograr mayor presencia en Nicaragua, Ortega y su gobierno no sólo deben lograr un buen desempeño, sino además dar signos de apertura interna que le permitan al partido revisar sus mecanismos y ampliar sus capacidades y oportunidades.

Crecimiento, desigualdad y pobreza en América Latina

La semana pasada, José Luis Machinea –Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)– comentó brevemente los resultados de la investigación sobre el Panorama social de América Latina. El estudio será presentado en diciembre, pero el secretario ejecutivo aprovechó la "Segunda Feria de Innovación Social" celebrada en Ciudad de México, para mostrar los nuevos indicadores de pobreza de Latinoamérica. El funcionario de la CEPAL dijo que en los últimos años se ha registrado una reducción de la pobreza, pero que aún persisten los problemas de desigualdad y exportaciones poco diversificadas.

Según Machinea, entre 2002 y 2006, se registró una reducción en los niveles de pobreza debido al crecimiento económico en la región latinoamericana. En cuatro años la pobreza total cayó del 43% al 40%. De igual forma, y como parte de la pobreza total, la pobreza extrema también se redujo del 19% al 15%. Según la CEPAL, América Latina atraviesa un ciclo de crecimiento que se prevé que finalice alrededor de 2007. Si los cálculos y los pronósticos de la entidad son acertados, el PIB per cápita de la región crecerá un 14.6%.

A pesar de los logros en la lucha contra la pobreza, el secretario ejecutivo de la CEPAL fue cauteloso en celebrar los resultados, pues considera que el gran reto de la región es la reducción de la desigualdad. Una vez más, Latinoamérica figura como una de las regiones más desiguales del mundo debido a que las personas y las pequeñas empresas no tienen los activos suficientes para obtener más riqueza. En este sentido, el funcionario expresó la importancia de una mejor educación, nuevas tecnologías, acceso a créditos y tierras, para que los trabajadores y pequeñas empresas puedan alcanzar mayor productividad.

También, sostuvo la importancia de la diversificación de las exportaciones, pues considera que una economía con bajo crecimiento económico y poca apertura comercial, obtendrá pocos avances en su lucha contra la pobreza. La volatilidad del crecimiento económico en los países de la región hace necesaria una política económica que aumente la capacidad productiva y financie la política social. Así, el funcionario concluyó que el sostén de la política social es el crecimiento económico sostenido.

La desigualdad económica en América Latina

Los avances en la lucha contra la pobreza están limitados por la desigualdad económica que impera en los países de la región, pues los indicadores de pobreza son poco sensibles a las variaciones del PIB. La economía local puede crecer, sin embargo, esto no significa que ese crecimiento –el aumento de la riqueza nacional– llegue a los pobres. Las economías con fuertes desigualdades en la distribución del ingreso necesitan tasas de crecimiento más altas para registrar avances en la lucha contra la pobreza.

De acuerdo a la CEPAL, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, al punto que presenta rasgos similares a los patrones de distribución del ingreso del África subsahariana. El coeficiente de Gini –indicador que calcula la distribución del ingreso– de América Latina muestra que en Argentina, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Ecuador ha aumentado la desigualdad; mientras que en Uruguay, México, Panamá, Chile, Guatemala y Honduras ha disminuido. El estudio presenta a Colombia y Nicaragua con los mismos patrones de distribución del ingreso y no se registran datos para El Salvador.

Según la CEPAL, la inequidad se puede enfrentar a través de una política social que elimine la mano de obra barata: las inversiones en educación, salud y tecnología deben estar acompañadas de mejoras salariales que eliminen el "abismo de ingresos" que separa a los ricos de los pobres. En materia social, CEPAL considera que la mayoría de países latinoamericanos ha empeorado la cobertura de la protección social. Es cierto que en la actualidad los países gastan más en protección social; sin embargo, el aumento se focaliza en algunos grupos sociales en desmedro de otros. No se trata de que los gobiernos no establezcan prioridades en su lucha contra la pobreza, pero faltan más recursos para atender a todas las personas en tales situaciones.

La financiación de la política social depende de los ingresos del Estado, y éstos del dinamismo de la economía. Una economía con bajo crecimiento no puede mantener una política social en el largo plazo. Los avances más importantes en materia social siempre están acompañados de un auge económico, pues sin ello los logros sociales se diluyen fácilmente. Según la CEPAL, México y Brasil deben preocuparse por crecer a tasas más altas, ya que los programas de ayuda focalizada impulsados por sus respectivos gobiernos podrían no surtir efecto en el largo plazo.

Otro de los problemas que debe enfrentar la región es la excesiva volatilidad del crecimiento del PIB. La estabilidad económica y el crecimiento sostenido no sólo son importantes para mayores inversiones locales, sino para asegurar la sostenibilidad de la política social en el largo plazo. En economías con desigualdades en la distribución de la riqueza, las etapas de expansión económica benefician principalmente a los de mayores recursos, y las épocas de recesión económicas afectan con mayor fuerza a los pobres. En este sentido, las políticas contra la desigualdad y las que impulsan el auge económico son complementarias para la erradicación de la pobreza.

Crecimiento, desigualdad y pobreza en El Salvador

Entre 2000 y 2005 la tasa de crecimiento promedio del PIB en El Salvador fue de 2.2%. Al añadir las tasas pronosticadas por la CEPAL para 2006 y 2007, el crecimiento promedio del PIB alcanza el 2.5%. Esto demuestra que el dinamismo de la economía local está por debajo del crecimiento promedio de América Latina. El problema también se manifiesta al comparar a El Salvador con los demás países centroamericanos: la tasa de crecimiento promedio del Istmo (4.0%) supera a la del país.

Crecimiento del PIB, 2004-2007
(Variación porcentual anual)

Países	2004	2005	2006	2007
Argentina	9.0	9.2	7.5	5.5
Brasil	4.9	2.3	3.5	3.7
Chile	6.1	6.3	5.7	5.5
Costa Rica	4.2	4.1	3.7	3.5
El Salvador	1.5	2.8	3.5	3.4
Guatemala	2.7	3.2	4.0	4.0
Honduras	5.0	4.2	4.0	4.0
México	4.2	3.0	3.5	3.5
Nicaragua	5.1	4.0	4.0	4.0
Panamá	7.6	6.4	6.0	6.5
Venezuela	17.9	9.3	7.0	4.5
Caribe	4.0	4.2	5.9	4.3
América Latina	5.9	4.5	4.6	4.1

Fuente: Centro de Proyecciones de la CEPAL

En base a lo anterior, es importante indagar las limitaciones de la política social. Como ya se dijo anteriormente, el crecimiento económico es un importante aliado en la lucha contra la pobreza, ya que este se debe, la mayoría de veces, a un mejor dinamismo en el mercado laboral. Un crecimiento bajo se asocia a una demanda de empleos baja y viceversa. Si en El Salvador

la tasa de crecimiento promedio del PIB ha sido muy baja, los logros en política social también deben ser mínimos, a menos que exista una estrategia particular que cambie, en cierta forma, esta relación directa entre el comportamiento total de la economía y el mercado laboral.

En los últimos años, el gobierno ha impulsado una política social para atender a los más pobres del país. La columna vertebral de dicha política es Red Solidaria y el Plan 2021. En el documento *Programa Social de Atención a las Familias en Extrema Pobreza: Red Solidaria*, los diseñadores de este proyecto señalan que "El Salvador mostró avances importantes en la mejora de los indicadores sociales y en la reducción de la pobreza y extrema pobreza durante los años noventa […] Estos avances, sin embargo, no han logrado consolidarse recientemente como resultado de un menor ritmo de crecimiento económico, la ausencia de mejora en la distribución del ingreso y las desigualdades territoriales".

Como se puede ver, el mismo gobierno reconoce el poco dinamismo económico y el estancamiento en el logro de las metas sociales en los últimos años. Por ello está impulsando una política social focalizada a través de Red Solidaria y el Plan de Educación 2021. El éxito de ambas medidas depende, en última instancia, del comportamiento de la economía, pues las políticas públicas están estrechamente vinculadas a la capacidad fiscal del Estado, la que, a su vez, depende del auge o depresión de la economía.

En la actualidad, el gobierno cuenta con pocos recursos para financiar la política social debido al bajo nivel de recaudación de los impuestos, el alto endeudamiento y el estancamiento económico. En el documento *¿Cómo está nuestra economía? 2005-2006*, FUSADES confirma una de las tesis mantenidas por este semanario desde hace algún tiempo: "Actualmente, el gobierno de El Salvador enfrenta limitaciones fiscales severas para disponer de los recursos necesarios para garantizar las metas propuestas en programas sociales como el Plan Nacional de Educación 2021 y la Red Solidaria". Esto reafirma la postura de que las metas sociales están, en última instancia, supeditadas a los logros y avances de la economía.

Por otro lado, la desigualdad en la distribución del ingreso también impide avances en la lucha contra la pobreza. En El Salvador, al igual que en América Latina, existe una concentración del ingreso nacional. Según el *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003*, entre 1992 y 2002, aumentó la concentración del ingreso: en 1992, la quinta parte más pobre de la población tenía acceso al 3.2% del ingreso, mientras que la quinta parte de la población con más altos ingresos accedía al 54.5% del ingreso nacional. En 2002, la desigualdad aumentó, ya que la quinta parte más pobre de la población sólo accedió al 2.4% y la quinta parte más rica al 58.3%. En una década, pues, los salvadoreños más pobres perdieron cerca del 1% y los de mayores ingresos lograron 4% más del ingreso nacional.

Las bajas tasas de crecimiento y la desigual distribución del ingreso hacen menos efectivas la política social del gobierno. A esto hay que añadir la falta de voluntad política para impulsar una reforma fiscal y el gasto de recursos en el pago de la deuda externa. Para superar esta situación, se debe potenciar a los sectores productores de bienes e intensivos en el uso de mano de obra: la agricultura, micros y pequeñas empresas. De esa manera, las personas que son beneficiadas por la política social en las zonas rurales también contarán con una fuente de empleo e ingresos seguros. En las zonas urbanas, el apoyo a las pequeñas unidades productivas es importante, ya que dichas actividades emplean la mayor parte de los trabajadores del sector informal y formal. Una política social activa basada en una economía dinámica es la mejor estrategia en la lucha contra de la pobreza.

Inseguridad y violencia

El encanto por la paz nacido en 1992 se transformó, rápidamente, en desencanto, ante la inercia y la incapacidad del Estado salvadoreño de darle rumbo global a la nación; es decir, de darle sentido a su reconstrucción democrática. Existe un descontento social generalizado con la clase política y su modo de actuar en el ejercicio del poder. Este ejercicio político está en crisis y, con él, el sistema político. En este sentido, las siguientes líneas constituyen una reflexión sobre los orígenes de la violencia en el país y sobre las reacciones de la sociedad civil, así como consideraciones relativas a la precariedad del sistema político, policial y judicial salvadoreño.

Actualmente, en El Salvador, ya no se registran muchos casos de violencia política, como en décadas anteriores, pero sí hay una violencia cuyo foco principal es la delincuencia. La misma tiene mayor incidencia en la región metropolitana y en departamentos con rápidos cambios económico-sociales, como Sonsonate o San Miguel.

Ciertamente, la violencia delincuencial genera inseguridad entre los ciudadanos y sus agentes pueden no ser ajenos a algunos casos de violencia política sucedidos en la postguerra. Sin embargo, entre ambas manifestaciones hay diferencias. La violencia política responde a un enfrentamiento por el poder; la violencia delincuencial más bien se alimenta de las debilidades del Estado, sin buscar su transformación.

Esta última es impulsada por una lógica difusa, de ataque indiscriminado, con alto rendimiento y bajo costo para los delincuentes; rebasa la capacidad estatal de respuesta, hace que el Estado y las instituciones encargadas de brindar seguridad pierdan legitimidad frente a la sociedad civil y obliga a que esta última organice su propia defensa e incluso restrinja sus propias libertades ante el fracaso estatal de dar solución al problema.

La inseguridad, la violencia y la delincuencia no sólo deslegitiman al Estado, sino que también elevan los costos monetarios para su control. El primer sector que se ve afectado económicamente es la sociedad: incluye los gastos de prevención y sanción pública y privada, más el valor directo de los daños. En el caso de las empresas, esos costos –determinados por pérdidas directas y por las dificultades para acceder a ciertos mercados— se añaden a los precios de venta de los productos.

Para estimar los costos de la violencia en El Salvador habría que incluir, cuando menos, seis grandes rubros: daños contra la propiedad privada, daños contra el sector público, daños contra las personas (extorsiones, secuestros, homicidios), bienes y servicios ilegales (narcotráfico), gasto público en seguridad y justicia, y gasto privado en vigilancia, litigios y pólizas de seguros. Para el caso, en El Salvador operan más de 50 empresas privadas de seguridad legalmente establecidas, con un personal que llega a los 80 mil efectivos, cifra que en la actualidad cuadruplica a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por otra parte, en manos de la población civil se han contabilizado más de 510 mil armas de fuego, la mayoría consideradas de autodefensa, y se han estimado unas 128 mil armas no reportadas al Registro de Armas del Ministerio de Defensa. En cierto modo, una parte de ciudadanos opta por armarse como medida de seguridad. En esta línea, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una de las principales razones que tiene la ciudadanía para armarse es la autodefensa ante las maras. Estas últimas han transformado la capital, ciudades intermedias y sus municipios en áreas altamente inseguras para la sociedad civil. Son complejas las causas que explican el surgimiento de las maras. Entre otras, se

pueden mencionar las siguientes: la precaria incorporación de la juventud al mercado laboral, la falta de programas de orientación juvenil, la ausencia de acceso a servicios educativos, las cada vez más débiles relaciones intra familiares y la falta de espacios recreativos y deportivos. A lo anterior hay que añadir las ineficientes políticas de seguridad —planes "Mano dura" y "Súper mano dura"—; el debilitamiento de instituciones sociales intermedias (familia, iglesia, escuela y comunidades); y la inseguridad económica acompañada de la impunidad política.

Con las maras, se trata de grupos compuestos por jóvenes y mayores de edad de ambos sexos, que desarrollan entre sí lazos de solidaridad e identificación con las pandillas, por motivos diversos. Las maras disputan entre sí el control de espacios territoriales. Según la PNC, en 1997, las maras operaban en doce zonas de la capital. En la actualidad, operan en todo el país: existen 402 grupos de maras que aglutinan aproximadamente 13 mil 450 integrantes, de los cuales 672 son mujeres. Los rangos de edades se encuentran entre los 16 y 25 años de edad (Ver J. M. Cruz (Editor), *Maras y pandillas en Centroamérica. Volumen IV.* San Salvador, UCA Editores, 2006*).*

En fin, los problemas que plantean las maras requieren respuestas que vayan más allá de lo exclusivamente penal y policial, pues muchos de sus miembros no sólo generan violencia, sino además son víctimas de esta.

Las estructuras sociales

Según el director del Polígono Industrial Don Bosco, José Morataya, el *boom* que ha experimentado la criminalidad está relacionado con intereses económicos y políticos, así como con la precaria situación del empleo en el país, que hace que millares de salvadoreños y salvadoreñas permanezcan desempleados. El aprieto no ha sido compensado con una estrategia alternativa; la nación es gobernada con una institucionalidad frágil, entre otras razones, porque no se ha encontrado un nuevo eje articulador de la gestión estatal que sustituya a la voracidad económica de los grupos más ricos de El Salvador. Mientras las leyes y las políticas sobre seguridad no se renueven y no se construya un sistema ciudadano seguro, el país se encontrará atrapado por la violencia criminal.

Adicionalmente, hay otros dos factores que inciden en la inseguridad y la violencia. Primero, el debilitamiento de las instituciones especializadas en garantizar la seguridad ciudadana, debilitamiento que alimenta las prácticas autoritarias y socava los valores básicos —como el respeto a la dignidad de los demás— para un ejercicio ciudadano responsable. Estos valores han sido sustituidos crecientemente por otros promovidos por la cultura comercial. Segundo, la inexistencia de un piso mínimo de seguridad económica, lo cual genera desprotección social para la mayoría de ciudadanos. A esto se agrega la rentabilidad del delito, lo cual explica la frecuencia con que se cometen nuevos crímenes.

Al auge de la criminalidad se suma la impunidad, es decir, la seguridad de que una persona, por su cargo o función pública, no será sometida a la justicia y que incluso será protegida por quienes detentan poder. La impunidad suele proteger a criminales de cuello blanco, que se mueven en las altas esferas políticas y empresariales. El desarrollo de una cultura de desconfianza a la autoridad y la inoperancia del Órgano Judicial han creado una situación de impunidad generalizada que, a la vez, se convierte en fuente generadora de más delitos. El establecimiento de la seguridad pública y la vigencia del Derecho son imposibles a partir del funcionamiento real del Estado salvadoreño. A su vez, en el combate del crimen se requiere de una estrategia que comprenda la participación organizada de la ciudadanía, así como de las necesarias dosis de autocontrol personal y de coerción estatal. Una estrategia de se-

guridad pública integral exige los siguientes componentes: seguridad social, participación ciudadana, efectividad policial, eficiencia judicial, reinserción y rehabilitación social.

Contra el crimen y a favor del crimen

La población exige acciones drásticas por parte de las autoridades, aun a costa del peligro de un aumento de la represión y de la reducción de las libertades ciudadanas. Impera una psicosis por acabar con la inseguridad e impunidad a como dé lugar: pena de muerte y cadena perpetua. Algunos funcionarios públicos están convencidos de que los procedimientos legales son un obstáculo para combatir la criminalidad.

Por otra parte, hay que decir que existen ciertos grupos que no están interesados en mejorar la seguridad y disminuir la violencia. Éstos no son únicamente grupos de pandilleros o del crimen organizado; son grupos económicos poderosos, vinculados al partido gobernante, acostumbrados a competir en un marco de privilegios especiales, que les permite especular y obtener ganancias extraordinarias a partir de estirar las leyes en función de sus intereses. Construir una sociedad más segura y con menos delincuencia implicaría someter a la ley a estos grupos arcaicos. Sería una ingenuidad político-social no reconocer su poder.

No hay día de prensa sin violencia

En la actualidad, la violencia figura como el principal problema que agobia a la población, muy por encima de preocupaciones de índole económica. La cobertura de los medios de difusión refleja también esa preocupación. La temática global en las preocupaciones sociales se refiere a asuntos de seguridad: la violencia común y los procesos judiciales reciben una atención permanente. Otros temas más específicos, como la pena de muerte y cadena perpetua, aparecen con intensidad en boca de algunos funcionarios públicos unos días y, luego, desaparecen en forma súbita, como si los problemas ya no existieran.

A ello se suma el tratamiento que la violencia ha recibido en los distintos medios de comunicación. Pese a la creciente espiral de criminalidad, hasta hace una semana, varias de estas empresas mediáticas establecieron un acuerdo ante la sociedad a fin de cumplir con una serie de parámetros que regulan el manejo y presentación de los hechos violentos.

En definitiva, ni el Estado ni los partidos políticos han podido responder a las exigencias ciudadanas, ya que ello implicaría una renovación y reconstrucción del quehacer político. Es decir, reconocer la ausencia de mecanismos que frenen la inseguridad, la violencia y la delincuencia en el país. La seguridad ciudadana es un servicio público que el Estado debe garantizar y proteger obligatoriamente. Enfrentar la violencia y la inseguridad, por tanto, es manifestar la voluntad política de poner fin o reducir los índices de violencia en el país.

¿Periodismo en crisis?

No son pocos estudiantes de periodismo y reporteros de oficio, que apostaron por esta profesión creyendo que desde la misma podrían ayudar a resolver los problemas del país. Vieron en ésta una herramienta para contribuir a revelar la verdad, atacar la corrupción, informar a la sociedad y transformar sus estructuras. A quienes pasaron por las aulas universitarias les alimentaron ese deseo, educándolos para comunicar con objetividad, responsabilidad y ética. Pero al llegar a las empresas de difusión masiva se toparon con una realidad distinta a la que imaginaron: su preocupación permanente por el índice de audiencia, por atraer más anunciantes, por las ganancias a obtener y por mantener un estado de cosas que favorezca a sus intereses. Lo anterior es lógico, por su misma naturaleza; pero, entonces, no se vale que pretendan que el público crea que son veraces, independientes y ecuánimes.

No obstante, la población le confió a esa industria la misión de mantenerla informada; la gente ha buscado en las páginas de los periódicos, el dial de los radios o las pantallas de televisión, los datos que no puede obtener personalmente por no tener acceso a los mismos, por sus muchas ocupaciones o por comodidad. Por eso, algunos expertos hablan de que se vive una realidad "mediatizada" construida por lo que el empresario, el editor informativo y el reportero deciden si es o no importante. Son éstos quienes filtran la noticia diaria y sus criterios no siempre son técnicos; predominan en ellos los intereses comerciales o políticos, por lo que son capaces de manipular la percepción de sus audiencias. Por eso, en El Salvador hay cadenas mediáticas controladas por una cúpula empresarial y política que ocultan o manosean la información para mantener su posición privilegiada. Ese es el marco de referencia para entender la más reciente decisión de estas empresas ante el fenómeno de la violencia y las reacciones de algunos sectores sociales.

El pasado 9 de noviembre, quince medios de difusión y la Asociación de Radiodifusores de El Salvador acordaron *"mejorar el tratamiento noticioso para no promover la violencia en el país"*. Los once puntos de ese pacto son razonables y algunos responden a los señalamientos que varias veces se les han hecho desde este y otros espacios. A los medios les han exigido tratar con respeto y dignidad a las víctimas, observar el principio de inocencia, evitar el sensacionalismo, no hacer de las "redadas policiales" un espectáculo, abrir espacios para la participación ciudadana y ser más responsables con la información. Todo eso está incluido en el mencionado convenio. Esas medidas también son convenientes para las empresas porque, poco a poco, la población ya había dejado de creerles ciegamente. Buena parte de la ciudadanía ha comenzado a darse cuenta del engaño mediático al que la han sometido y ha cuestionar eso, hasta el punto de dudar de las intenciones del citado acuerdo.

Que varias de estas empresas se hayan aliado sin condiciones con las "iniciativas" oficiales contra la delincuencia y la violencia de las maras –sobre todo con el gobierno actual y el anterior– o que en las campañas electorales hayan apoyado a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), despierta una enorme sospecha: quizá quieren, se comenta, reducir la magnitud del problema para evitar que la imagen presidencial y de su gabinete se deterioren aún más. Hablan de autocensura y puede que tengan razón. Desde que los editores de noticias anunciaron el compromiso, la información sobre las muertes violentas y la situación de inseguridad en el país ha disminuido considerablemente.

Si eso es así, y además es un acto deliberado, se debe advertir que una falsa idea de bienestar no servirá de nada porque la realidad se impone al silencio. Por eso, si quieren hacer algo serio para solucionar el problema basta con realizar bien su trabajo, con no convertir la noticia en una mercancía "amarillista" en la que la sangre y los cadáveres ocupan el primer plano,

con ser más acuciosos en el tratamiento de la información —confirmándola y siendo críticos—, con mostrar en sus notas periodísticas la magnitud del problema y señalar a los funcionarios que no hacen lo debido para resolverlo. Si eso sucede, seguramente su labor ayudará a que la población pase de la indignación a la acción, exigiendo a las autoridades mayor compromiso con la solución del fenómeno y espacios de participación en la discusión y la ejecución de las medidas a impulsar. No obstante, lo que se acordó entre los dueños de los medios no se debe dejar de lado porque en ningún momento se afirma que obviarán del todo el tema.

No obstante, lo que hoy sucede con los medios de difusión debe ser el punto de partida para su transformación profunda. Es necesario que sus dueños den libertad e independencia a sus editores y a la sección informativa para que, así, no influyan tanto los intereses comerciales en el mensaje. ¿Tendrán costos? Quizá; pero en la medida que todos lo hagan serán menores y los beneficios para el país serán mayores. El gran poder empresarial, político y mediático ha sido el mayor obstáculo en los intentos por democratizar el país, porque para eso es indispensable que la población reciba información correcta. Y esto no sucederá, mientras esa trilogía no se rompa. ¿Estarán dispuestos a hacerlo los empresarios mediáticos?

También se debe superar la soberbia del periodismo y de quienes determinan su línea editorial. Deben ser capaces de recibir críticas ciudadanas a su labor y dejar de considerarse el "cuarto poder" o los supervisores de los órganos estatales, mientras nadie controla sus abusos En ese camino, es importante que –además de autorregularse– acepten con humildad la vigilancia de la población a su trabajo. En naciones más desarrolladas democráticamente, esta función se canaliza por medio del Defensor del lector o de la audiencia. "El País", periódico español, ha desarrollado esta figura y ha puesto a disposición de sus lectores el Libro de Estilo en el que se declaran los principios editoriales y de conducta de sus reporteros. Así, sus lectores pueden contrastar y detectar las incoherencias de la teoría con la práctica periodística, denunciándola por medio del citado Defensor. Esta figura no sólo ayuda a mejorar la calidad del producto informativo, sino que enriquece la sintonía y las relaciones entre el medio y sus periodistas con el lector que siente como propio al periódico, la estación de radio o de televisión.

Mientras no se dé un salto de calidad y se transforme la mera difusión en verdadera comunicación, en la que la población tenga la posibilidad de reaccionar frente a publicaciones o transmisiones mediáticas, las "buenas intenciones" de esas empresas seguirán bajo sospecha. Tan preocupante ha sido esa situación en otras regiones de Latinoamérica y el mundo, que ya se ha planteado la posibilidad de que el periodismo se convierta en otra rama del espectáculo o desaparezca ante la fuerza que están cobrando las nuevas tecnologías, cuyos beneficios podrían incluso permitir la "auto información" ciudadana.

Raquel San Martín, reportera del diario argentino *La Nación,* señala que "el periodismo muestra hoy un rostro irreconocible: mezclado con el entretenimiento, contaminado con las operaciones políticas, con fronteras generosas que admiten que cualquier contenido que alcanza el espacio público se etiquete como actividad periodística, incapaz de anticipar las crisis sociales". Eso también ocurre en El Salvador y debe cambiarse, para bien del país y de su muy frágil democracia.

Esta profesión debe recuperar su tarea fiscalizadora y promover la formación ciudadana, buscar la verdad, recuperar la ética y la actitud crítica. Si no se puede, entonces que no se ofrezca como tal y que no asuma una falsa actitud puritana. Hay que redefinir al periodismo, distinguir a los que son periodistas de los que no lo son, precisar claramente qué función quiere desempeñar en la sociedad y cuáles serán sus principios. Recuperar la dignidad y la importancia de la labor informativa es una tarea de quienes la impulsan con real compromiso, pero también de una sociedad que no merece seguir sometida a la mentira y la impunidad.

Presentamos a continuación un comunicado de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, en torno a la grave situación de violencia que vive El Salvador.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

"La Democracia se construye sobre la base de la verdad y del más amplio e irrestricto respeto de los derechos humanos"

LA SEÑORA PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ANTE LA GRAVE SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DELINCUENCIAL

EXPRESA su satisfacción por el esfuerzo de las instituciones públicas y del sector privado en visibilizar y priorizar la problemática de la delincuencia, en cuanto a su erradicación, compartiendo así la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que, desde largo tiempo, ha recomendado y abogado por el fortalecimiento de las instancias involucradas en el combate a la misma.

CONSIDERA significativo y aleccionador el mensaje del Señor Embajador de Estados Unidos de Norte América sobre la problemática, tendiente a promover en los sectores públicos una actuación más contundente, directa y responsable en cuanto al combate de la delincuencia, la impunidad y la corrupción, consideradas estas calamidades, como responsabilidad nacional impostergable.

LAMENTA, sin embargo, que haya sido necesaria la llamada de atención a nuestro país por parte de una personalidad de la diplomacia extranjera para despertar en la conciencia nacional una mayor preocupación ante la grave crisis de violencia en El Salvador.

EXHORTA Al Señor Presidente de la República, excelentísimo Don Elías Antonio Saca, a tomar en cuenta la creación del "Fondo para la Paz Social", constituido por contribuciones temporales de los sectores empresariales, financieros y, en general, de la ciudadanía, para que colaboren con su aporte económico, al fortalecimiento, capacitación intensiva y adquisición de medios técnicos y científicos modernos y confiables para la investigación del delito, para la PNC y la Fiscalía General de la República, con el fin de lograr la renovación profunda y estructural de la Seguridad Pública.

INVITA a la ciudadanía interesada a contribuir a un auténtico combate de la delincuencia, al fortalecimiento del Estado de Derecho y, en particular, al saneamiento y renovación de las instituciones responsables de la Seguridad Pública, que apoyen y promuevan esta iniciativa de creación del "Fondo para la Paz Social", del cual se hace intérprete y promotora la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

REITERA una vez más, su firme convencimiento, de que la delincuencia en El Salvador tiene raíces profundas y causas estructurales, todavía no enfrentadas ni superadas y que actualmente están aflorando ante la conciencia nacional con un cierto grado de intensidad y de evidencia.

CONSIDERA que la debilidad innegable del Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, imperantes, desmedidas y no perseguidas representan los signos de un

malestar social e institucional, que necesita urgentemente de respuestas contundentes y definitivas.

CONSIDERA que el combate de la delincuencia representa un aspecto importante de la recuperación del Estado de Derecho y, como tal, debe ser asumido por el sector público con responsabilidad directa, y por la sociedad civil con espíritu solidario y con la firme decisión de pedir cuentas a las instituciones públicas en cuanto a la solución de dicha problemática.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estará vigilando con atención especial este proceso.

San Salvador, 08 de noviembre de 2006.

El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	$ 50.00
El Salvador	
personal	$ 15.00
correo	$ 20.00
Centro América y Panamá	$ 35.00
Norte y Sur América	$ 65.00
Europa y otras regiones	$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque (503) 2210-6671 o escríbanos a **cidai@cidai.uca.edu.sv**